

# El movimiento de desocupados de Argentina: Entre la gestión colectiva de políticas neoliberales y la gestión colectiva de la vida

Virginia Manzano<sup>1</sup>

Recibido: 15 de diciembre de 2019/ Aceptado: 12 de marzo de 2020

**Resumen.** En este artículo analizo el campo de relaciones que se abrió con el movimiento de desocupados en Argentina. Con la base en una etnografía sobre los momentos extraordinarios de la protesta y el ritmo de la vida cotidiana, describo los lenguajes para la controversia y los lugares disponibles para los movimientos colectivos. Además, abordo los lenguajes de la lucha para considerar cómo las experiencias de riesgo fundan prácticas colectivas de contención, cuidado y afecto. Sostengo que el movimiento de desocupados convirtió a los desempleados en sujetos de políticas neoliberales, en tanto comenzó a gestionar colectivamente programas de transferencia condicionada de ingreso con los cuales el Estado respondió a la movilización. Sin embargo, ese vínculo era desbordado por prácticas de contención que tenían como centro a la vida. Con ello, pretendo contribuir a una mejor comprensión de la relación entre movimientos sociales y Estado y a los debates sobre autonomía.

**Palabras claves:** movimientos sociales; Estado; contención

[en] The Unemployed Movement in Argentina: Between the collective management of neoliberal policies and the collective management of life

**Abstract.** In this article I analyze the field of relations that opened with the unemployed movement in Argentina. Based on an ethnography about the extraordinary moments of the protest and the rhythm of everyday life, I describe the languages for the controversy and the places available for collective movements. In addition, I address the languages of the struggle to consider how risk experiences found collective practices of containment, care and affection. I contend that the unemployed movement turned the unemployed into subjects of neoliberal policies, as it began to collectively manage conditional income transfer programs with which the State responded to the mobilization. However, this link was overwhelmed by containment practices that were centered on life. With this, I intend to contribute to a better understanding of the relationship between social movements and the State and to debates about autonomy.

**Keywords:** social movements; State; containment

**Sumario.** 1. Introducción. 2. Campo de relaciones y lenguajes de la controversia. 3. Arriesgar y afirmar: La experiencia de la lucha. 4. La gestión de las políticas, la gestión de la vida: Entre la lucha y las prioridades. 5. Palabras finales. 6. Bibliografía.

**Cómo citar:** Manzano, V. (2020). El movimiento de desocupados de Argentina: Entre la gestión colectiva de políticas neoliberales y la gestión colectiva de la vida, en *Revista de Antropología Social* 29(2), 151-166

## 1. Introducción<sup>2</sup>

El 27 de junio del año 1996, el entonces gobernador de la provincia patagónica de Neuquén, Argentina, firmó un acuerdo con quienes habían mantenido durante seis días bloqueadas la ruta nacional 22 y la provincial 17 en los accesos a Cutral-Có y Plaza Huinul. Ambas ciudades habían crecido desde 1918 vinculadas con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales hasta que en 1992 el Congreso de la Nación aprobara su privatización, tras lo cual se perdieron 42.100 puestos de trabajo (Auyero, 2004). Sobre la ruta se levantaron tiendas de

palos y plásticos, y se formaron diez puestos-barricadas señalizados con neumáticos encendidos, denominados “piquetes”; alrededor de estos se reunieron manifestantes que usaban barbijos de color blanco para evitar los efectos nocivos del humo de las cubiertas, a los que la prensa gráfica se refirió con el término “piqueteros”. En torno al fuego, niños, ancianos, mujeres y varones cocinaban colectivamente, en ollas populares; conversaban o escuchaban música soportando la vida a la intemperie y las bajas temperaturas. De manera conjunta, resistieron el avance de tropas de la Gendarmería Nacional que intentaron el despeje de la ruta con gases lacrimógenos;

<sup>1</sup> Universidad de Buenos Aires-Conicet, Instituto de Ciencias Antropológicas, [virginiamanzan@gmail.com](mailto:virginiamanzan@gmail.com)

<sup>2</sup> Esta investigación es financiada con fondos provenientes del Programa UBACyT de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires.

tras ello, el Juzgado Federal se declaró incompetente y ordenó el retroceso de los gendarmes. Después de siete días, el gobierno provincial se comprometía ante los piqueteros a promulgar un decreto de emergencia ocupacional y social para la región, a reconectar en un plazo de 48 horas los servicios públicos a quienes los tenían suspendidos por falta de pago, a elaborar un plan de obras públicas, y a distribuir 650 cajas de alimentos.

Cuatro años más tarde, una nota de opinión en la prensa afirmaba: “La fórmula de la protesta nació en la Patagonia hace tres años, en los estertores del menemismo, y ahora ya está en las puertas de la Capital: la semana pasada fue en el oeste del conurbano, en Isidro Casanova; ésta, resurgió en el sur, y ramificada”<sup>3</sup>. Como la crónica registraba, los cortes de ruta protagonizados por desocupados –piqueteros– para demandar puestos de trabajo se habían extendido a lo largo de toda la Argentina, con un marcado epicentro en el distrito de La Matanza, zona oeste del Gran Buenos Aires. Los distintos niveles de gobierno estandarizaron la respuesta ante esos sucesos mediante el reparto de alimentos y, en función de la intensidad de los piquetes, el aumento de la cantidad de beneficiarios en programas de transferencia condicionada de ingresos.

Los programas de transferencia condicionada de ingresos eran financiados por organismos internacionales de crédito como parte de ajustes estructurales orientados por los parámetros fijados en el Consenso de Washington a inicios de la década del ‘90, que eran disciplina fiscal, reforma impositiva, liberalización financiera y del comercio, reforma de los tipos de cambio, inversión extranjera directa, privatización y desregulación (Llistar, 2003). Los beneficiarios debían contraprestar cuatro horas de trabajo diarias en proyectos sociales o productivos a cambio de una suma de dinero menor al valor del salario mínimo establecido en cada región. Los proyectos, a su turno, debían ser elaborados y gestionados de manera descentralizada por gobiernos municipales u organizaciones comunitarias.

Este tipo de programas se volvió el centro de las interacciones entre el movimiento de desocupados y el Estado, tanto en los momentos extraordinarios de la protesta como en el ritmo ordinario de la vida cotidiana, cuando las organizaciones de desocupados comenzaron a gestionar colectivamente sus componentes. Sin embargo, los piquetes condensaban experiencias corporales y afectivas, así como prácticas de contención, que indicaban el dinamismo de un campo relacional que se modelaba con presencias estatales pero que las desbordaba en múltiples y variados términos porque se fundaba en el cuidado de la vida.

La actuación de los movimientos sociales sobre el sistema político mediante demandas discernibles y claramente identificables ha sido un tema de análisis recurrente en las ciencias sociales dedicadas al estudio de las dinámicas de la acción colectiva. Bajo esta perspectiva, algunos analistas consideraron que el movimiento piquetero se posicionaba en una relación de dependen-

cia respecto del Estado, debido a la institucionalización de programas de transferencia condicionada de ingresos como repuesta a las demandas de trabajo y de inclusión social, teniendo en cuenta que esos recursos eran centrales para la supervivencia de sus miembros así como para el funcionamiento cotidiano de las organizaciones de desocupados (Svampa y Pereyra, 2003; Merklen, 2005). La política del movimiento piquetero debía entenderse, entonces, como una política estratégica que pivotaba entre la represión, la confrontación y la negociación, a la vez que se afirmaba en una narración de lucha y dignidad para resignificar el vínculo con el gobierno y fomentar un espacio común de identificación colectiva ante la heterogeneidad de trayectorias, ideologías, géneros y edades que envolvía la condición de desocupación (Svampa y Pereyra, 2003). Otros análisis, que contemplaron una secuencia histórica más amplia, concibieron al movimiento piquetero como protagonista de una segunda ola de incorporación de los sectores populares en las formas de gobierno, tras haber sido excluidos o desincorporados a causa de regímenes militares y de reformas democráticas liberales que debilitaron las bases institucionales de la primera incorporación conquistada por el movimiento obrero a mediados de siglo XX. Para esta visión, el movimiento piquetero orientaba la búsqueda contenciosa de base territorial hacia la transformación social vía la inclusión de los sectores populares en la arena sociopolítica en calidad de ciudadanos y asalariados (Rossi, 2015).

A diferencia de estas perspectivas de análisis, la antropología rara vez concibe los movimientos sociales como entidades acabadas, opuestas y externas al sistema político, que se vinculan con este último a través de demandas claras y precisas. Este punto de vista disciplinar se funda, probablemente, en la historia de la división del trabajo académico en el campo de estudio de los movimientos sociales, que asignó a la antropología el análisis de movimientos campesinos, milenaristas, nativistas o de revitalización. De este modo, los esfuerzos antropológicos se abocaron durante mucho tiempo a la comprensión de la producción de cultura, significados y saberes tanto como al ejercicio de prácticas cotidianas de resistencia en su imbricación con procesos de larga duración asociados con las formas de dominación occidental. Así, se registraron etnográficamente imaginaciones emergentes y plurales sobre la política que no se ciñen de manera exclusiva al terreno estatal o institucional puesto que actúan para crear otras formas de vinculaciones sociales, afectivas y de vida (Escobar, 1992; Manzano, 2013; Osterweil, 2014).

En esta clave, estudios antropológicos más recientes marcaron una distancia mayor con el análisis del carácter oposicional de los movimientos sociales, sea en términos de demanda o de resistencia cotidiana al Estado, para dar cuenta de espacios de encuentro donde se generan afectos, se cultivan otras formas de agencia y subjetividad y se experimentan, teorizan o diseñan otros modos de democracia y otras formas de ser y vivir en el mundo (Juris, 2012, 2014; Razsa y Kurnik, 2012; Osterweil, 2014; Escobar, 2017). Estas etnografías, muchas de ellas realizadas en colaboración con activistas

<sup>3</sup> “A las puertas de la Capital”. Diario *Clarín*, 7 de noviembre de 2000, página 3.

políticos, tratan sobre protestas alter-globalización y movilizaciones de “#Occupy Everywhere” en Estados Unidos y Europa (Juris, 2012, 2014; Razsa y Kurnik, 2012; Osterweil, 2014), o sobre luchas por el territorio frente a proyectos extractivistas del capital globalizado en América Latina (Nash, 2005, 2014; Escobar, 2017). En este último caso, se reivindican las luchas de sujetos indígenas y afro-descendientes por el territorio en tanto expresan un conflicto ontológico entre formas de ser en el mundo para instaurar una diferencia radical con la modernidad capitalista occidental y, en función de ello, existir o re-existir en formas comunales y autónomas de vida (Escobar, 2017).

Entre estas nuevas coordenadas de debate antropológico, el movimiento piquetero se ha transformado en un ejemplo señero de la puesta en ejercicio de valores comunitarios y de formas autónomas de vida que animan la discusión sobre los contornos de la política prefigurativa (Juris, 2012; Osterweil, 2014), la política del devenir (Razsa y Kurnik, 2012), o las ontologías políticas (Escobar, 2017). En este sentido, se ha elogiado y recuperado la capacidad del movimiento de desocupados para cuestionar proyectos neoliberales, y por extensión al capitalismo, a través de la creación de nuevas formas de vida que se habrían cimentado con la puesta en marcha de guarderías infantiles, emprendimientos para la producción de alimentos, centros de salud o restructuración de escuelas, entre otras. Estas formas de vida anclan en territorialidades no capitalistas, organizadas de acuerdo con métodos de democracia directa para la toma de decisiones colectivas, cuya vitalidad surge de actividades sociales para la producción y reproducción social que escapan a la explotación capitalista y a la dependencia estatal, convirtiéndose en núcleo para la vida comunal y autónoma (Razsa y Kurnik, 2012; Osterweil, 2014; Escobar, 2017). Si bien estas visiones del movimiento piquetero realzan dimensiones creativas de gran importancia tienden a subestimar el hecho de que las iniciativas colectivas y formas de trabajo se inscribían en programas de transferencia condicionada de ingresos, es decir, eran el eje de controversias con el poder gubernamental; por eso mismo, se encontraban bajo la tensión entre el disciplinamiento y la innovación. En términos más amplios, las propuestas teóricas enfocadas hacia la autonomía cuentan con menos herramientas para analizar los parámetros impuestos para la contienda política que supone la negociación por la expansión de derechos o el control colectivo sobre dimensiones del poder estatal (Hale, 2014).

De este modo, partiendo de propuestas conceptuales de autores como Roseberry (1994) y Hale (2014), en este artículo reconstruyo y analizo el campo de relaciones que se abrió con la movilización de los desocupados y cómo, contradictoriamente, se definieron los términos aceptados para las disputas, estableciendo lenguajes apropiados para la controversia y configurando lugares disponibles para los movimientos colectivos. A diferencia de los estudios centrados en el vínculo de los movimientos sociales con el sistema político, me interesa mostrar la operatoria de un campo relacional en distintas escalas, entre lo local, lo nacional y la trans-

nacional, lo cual implica no solo atender a la formulación de demandas, sino también a la puesta en juego de saberes y legibilidades para re-direccionar el bienestar social hacia poblaciones empobrecidas y desocupadas. Desde esta perspectiva, con la noción de “gestión colectiva” procuro captar movimientos condicionados por un campo histórico y situado de relaciones de fuerzas sociales y, al mismo tiempo, señalar que las prácticas colectivas cotidianas redefinieron categorías discursivas hegemónicas. En efecto, el término “gestión” se impuso en la década del noventa entre los diseñadores de políticas públicas a escala global, porque partían de la idea que serían los cambios en la gestión aquellos que mejorarían la calidad, la eficiencia, la eficacia y el incremento de productividad de los servicios sociales. La gestión era entendida como un mecanismo clave para optimizar recursos y convertir las restricciones presupuestarias en instrumentos activos de la política (Sojo, 1999). De modo contradictorio, la gestión colectiva de programas de transferencia condicionada de ingresos enlazaba la especialización de tareas, la adecuación de infraestructuras comunitarias, el diseño de criterios comunes para la redistribución de recursos y el cuidado comunitario de sectores particulares de la población.

Tal como he mencionado, estudios antropológicos recientes insisten sobre la capacidad de los movimientos sociales para crear formas alternativas de vida, pero en el caso del movimiento piquetero considero que estas formas no pueden pensarse fuera del proceso de gestión colectiva de políticas sociales. Este hecho instaura una serie de contradicciones entre las políticas que inciden sobre la vida en tanto tecnologías de gobierno y las prácticas cotidianas y colectivas que se entretienen con las condiciones de existencia para producir nuevos sentidos sobre la vida, así como para asegurar su calidad y durabilidad en contextos de desigualdad social (Fassin, 2018). Con relación a ello, retomo la categoría nativa de “lucha” porque remite a una experiencia vívida, intensa y ambigua que permite reconstruir la intersección entre la gestión colectiva de políticas neoliberales y la gestión colectiva de la vida, así como la articulación entre los momentos extraordinarios de la protesta y el ritmo ordinario de la vida cotidiana. El lenguaje de la lucha expresaba el dilema de exponer y arriesgar el cuerpo y la vida, pero también la capacidad para afirmarse como sujetos mediante prácticas de sociabilidad, afectos y cuidados. La lucha era un valor cuantificable para re-direccionar la orientación de las políticas neoliberales, pero ese mismo valor era desbordado en tanto esa redistribución se inscribía en el cuidado colectivo de la vida.

Para dar cuenta de estos aspectos, re-examinaré datos construidos durante un trabajo de campo antropológico de seis años de duración –2000 a 2006– en el distrito de La Matanza con dos organizaciones que eran parte del movimiento de desocupados: la Corriente Clasista y Combativa, y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Este re-examen parte de una nueva lectura de esos mismos datos bajo la categoría conceptual de “contención” propuesta por Lazar (2019) en su estudio etnográfico con activistas sindicales de Argentina, para señalar una relación cuasi-terapéutica que se basa en ofrecer a

las personas contextos políticos, sociales y culturales dentro de los cuales sentirse cuidados, comunicarse emocionalmente y poder actuar en el mundo.

La presencia prolongada en el campo y las relaciones intersubjetivas –dos pilares centrales de la construcción de conocimiento en antropología (Rockwell, 2009; Guber, 2011)– me permitieron volver inteligible la fluidez de vínculos de los cuales tomaba forma el movimiento de desocupados. He registrado cortes de ruta, marchas, movilizaciones, cursos de formación política, asambleas, reuniones, jornadas de entrenamiento de agentes sanitarios, y celebraciones en general. A través de conexiones interpersonales me desplazé por diferentes barrios, desarrollando trabajo de campo intensivo en tres de ellos: Santa Emilia<sup>4</sup>, Tierra Nuestra y San Alfonso. Los dos primeros se formaron durante la década del '80 como parte de ocupaciones organizadas de tierras, en tanto que el tercero era más antiguo, de mediados del siglo XX, y se pobló escalonadamente por trabajadores industriales que compraron esos terrenos a agentes inmobiliarios conocidos como “loteadores populares”.

En Santa Emilia mi labor se concentró en un antiguo edificio escolar abandonado y recuperado por mujeres, el cual se convirtió en la sede central de la Corriente Clasista y Combativa, además visité otros lugares conexos al movimiento como un centro de salud autogestionado y un refugio para mujeres que sufrían lo que en aquella época se definía como violencia doméstica o de género. En Tierra Nuestra y San Alfonso interactué con grupos coordinados por la figura de referentes barriales, ligados a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, donde las personas se convocaban diariamente para contra-prestar en proyectos comunitarios a cambio del beneficio de programas de transferencia condicionada de ingresos que habían logrado con la participación en el movimiento de desocupados. Eran espacios para mantener activa la vida del movimiento, puntos básicos de organización de manifestaciones y cortes de ruta, influidos por la intensidad que cobraban las relaciones de amistad, vecindad y parentesco, tal como también advirtieron otros trabajos antropológicos (Ferraudi Curto, 2006). A la par, construí un corpus documental compuesto de resoluciones ministeriales, informes del Banco Mundial, censos, libros y documentos sobre la historia de La Matanza, semanarios de partidos políticos y boletines informativos. Relevé, asimismo, ediciones de periódicos de circulación nacional y local que cubrieron los episodios de protesta.

## 2. Campo de relaciones y lenguajes de la controversia

El distrito de La Matanza se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en el punto oeste de la región conocida como Gran Buenos Aires o Conurbano, compuesta de 24 municipios que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una población estimada en 1.775.816 habitantes, según cifras del último Censo Nacional de

Población y Vivienda de 2010, es el distrito más poblado de la provincia que, a su vez, es la más poblada del país (15.625.084 habitantes). Su crecimiento más acentuado se produjo en estrecha conexión con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones; desde la década del '40 se instalaron allí grandes plantas industriales de los rubros automotriz, metalúrgico y textil, y florecieron establecimientos menores como talleres de tornería, fresado, bobinado de motores y fundiciones. Tan solo para dimensionar un aspecto de la magnitud de ese crecimiento, el censo de 1947 registró 98.471 habitantes en tanto que el de 1960 contabilizó 401.738.

En el transcurso de la década del '90, procesos sociales, económicos y políticos que se venían anudando desde los años setentas debilitaron profundamente las bases sobre las que se había asentado La Matanza como distrito obrero; me refiero a la concentración industrial y la desindustrialización, el aumento del desempleo, la informalidad laboral y la pobreza. En tal sentido, un informe del año 2003, elaborado por la entonces Secretaría Municipal de Empleo y Producción, sostenía: “En las décadas del '60 y '70 del siglo XX todo el distrito vivía un gran apogeo económico y se llegó a contar con 12.000 industrias que hoy se han transformado en unas 4000 con múltiples dificultades para producir”<sup>5</sup>. Hacia el año 2000, se estimaba que sobre un total de 575.654 personas que formaban la población económicamente activa, el 17,5 % eran desocupados abiertos (100.739) y el 15,2 % sub-ocupados (87.499). Asimismo, sobre un total de 470.000 empleados en relación de dependencia, el 39 % trabajaba bajo modalidades contractuales precarias, o en negro como se las denomina en Argentina.

En ese marco general, entre los años 2000 y 2001, miles de personas organizadas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC, de ahora en adelante) y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV, de ahora en adelante), montaron un piquete sobre la ruta nacional 3 en el distrito de La Matanza, a 21 kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por trabajo o, más precisamente, por puestos de trabajo, los cuales se distinguieron de otros piquetes debido a su duración: seis días en noviembre de 2000 y dieciocho en mayo de 2001. Ambas acciones se incorporaron en los recuerdos de sus protagonistas como el “*corte de los seis días*” o el “*corte de los dieciocho días*”; este último también era evocado como el “*corte histórico de Matanza*”.

Los piquetes de La Matanza concitaron la intervención disputada entre distintos niveles y áreas de gobierno, volviéndose centros de atención política de un mapa de cortes de ruta en distintos puntos del país, que la prensa contabilizaba diariamente para inquietar acerca de si esas protestas localizadas podrían dar lugar a un estallido social generalizado. Al respecto, informaban: “Mientras los cortes de ruta protagonizados por grupos de desocupados se extendieron ayer a distintos puntos del país, el presidente Fernando de la Rúa afirmó que

<sup>4</sup> El nombre de los barrios y de las personas son ficticios para preservar su anonimato ante la judicialización de la protesta social en Argentina.

<sup>5</sup> “El partido de La Matanza. Actividad Económica”. *Carta Informativa VI*, Junta de Estudios Históricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de la Matanza, Universidad Nacional de La Matanza, julio de 2003, pp. 13-16.

‘no hay posibilidad’ de que se produzcan estallidos sociales”<sup>6</sup>.

Esos mismos registros de la prensa nacional permiten identificar que, más allá de las variantes regionales, los cortes de ruta planteaban tres reclamos principales dirigidos a las autoridades del gobierno nacional: trabajo, alimentos y mejoras sociales. La demanda por trabajo, ya para ese momento, se había convertido en equivalente a puestos de trabajo, y los puestos de trabajo no eran otros que las prestaciones inscriptas en programas de transferencia condicionada de ingresos, conocidas popularmente como *planes*<sup>7</sup>. Así, se peticionaba el aumento en la cantidad de *planes*, mantener en el tiempo ese beneficio signado por la incertidumbre, aumentar la suma monetaria de la prestación, y denunciar el carácter injusto de la baja de beneficiarios. En cuanto a los alimentos, se trataba de una reivindicación inserta en una larga historia de relación entre poblaciones pobres y áreas de gobierno en Argentina (Manzano, 2013). En ese contexto los reclamos se movían en dos direcciones: mantener un volumen estable, medido en kilogramos, de la entrega mensual de alimentos e incorporar nuevas familias a programas alimentarios. Bajo el rótulo de mejora social se ordenaban diversas solicitudes, principalmente medicinas, seguidas de calzado, ropa, becas estudiantiles para jóvenes e infraestructura como obras públicas para la construcción y recuperación de escuelas y hospitales, la pavimentación de calles, y las conexiones de saneamiento como cloacas y agua potable.

Los vínculos que hicieron posible la formación del movimiento de desocupados de La Matanza y la definición de ciertos lenguajes de demanda hacia el Estado se deben enmarcar en una historia de organización colectiva que se remonta hasta fines de la última dictadura cívico-militar –1976-1983–. En efecto, en 1981 cobró forma un fenómeno nuevo hasta ese momento en las áreas urbanas de Argentina, como fueron las ocupaciones masivas y organizadas de tierras, primero en el área sur del Gran Buenos Aires y, posteriormente, en otros distritos, entre ellos La Matanza. En sus inicios, estas ocupaciones contaron con el apoyo de integrantes de Comunidades Eclesiales de Base de la Iglesia Católica<sup>8</sup>, Movimientos de Derechos Humanos como el Servicio de Paz y Justicia, y una coalición de distintos partidos políticos en oposición a la dictadura militar (Aristizábal e Izaguirre, 1988; Cravino y Vommaro, 2018). Debido a distintos aspectos que no puedo reconstruir aquí, entre ellos un cerco militar impuesto durante seis meses en torno a las primeras ocupaciones o los intentos de desalojo de las ocupaciones que siguieron en el tiempo, se gestó un lenguaje que realza el valor de la lucha colecti-

va, la resistencia y el heroísmo para producir el derecho a la tierra urbana.

Con la vuelta del gobierno democrático, la política estatal con relación a los barrios populares ha sido la radicación a partir de la regularización de la tenencia de la tierra (Cravino y Vommaro, 2018). Como consecuencia, entre las décadas de 1980 y 1990, se estableció un marco para demandar que tendió a privilegiar la negociación entre agentes del Estado y pobladores en función de la sanción de leyes de expropiación para obtener la titularidad de la tierra ocupada, la provisión de infraestructura –luz eléctrica, calles pavimentadas, agua potable, etc.–, y la ampliación de servicios escolares y educativos. Progresivamente, se configuró un saber-hacer que encuadra demandas en el lenguaje del derecho tanto para constituir al Estado como interlocutor como para expandirlo a los barrios autoconstruidos.

Los líderes surgidos en esas ocupaciones tuvieron un papel activo para dar forma a la CCC y la FTV cuando, a mediados de la década del ‘90, confluyeron con sectores sindicales, especialmente trabajadores del sector público afectados por reformas neoliberales<sup>9</sup>, que concebían al barrio como lugar central para la organización de un nuevo trabajador urbano, distinto al tradicional obrero masculino agrupado en fábricas, extendiendo la acción sindical de los lugares de trabajo a los de residencia (Manzano, 2013, 2017). Hacia 1995, hicieron uso de las clásicas herramientas de medición y legibilidad estatal de la población como encuestas y censos para ponderar el problema de la desocupación en los barrios. El uso de estas herramientas contribuyó a construir una nueva relación con los pobladores, en tanto la recolección de los datos se daba en el marco de conversaciones en las cuales se afianzaban vinculaciones y conexiones personales.

El resultado de esos censos hizo visible la magnitud de una categoría social, los desempleados, a la vez que se volvió evidencia para legitimar demandas hacia el Estado. Los censos, en tanto mecanismos empleados para registrar “fenómenos” de la población y convertir situaciones sociales en problemas sociales, constituyen uno de los resortes clave del “arte de gobierno” que, tal como formuló Foucault (2006), tiene como blanco a la población (número de muertos, enfermos, natalidad, etc.). En este caso, las demostraciones censales se inscribieron en modos específicos de saber-poder y se convirtieron en pruebas de verdad para ser interpretadas fundamentalmente por el gobierno a partir de la puesta en acto de un lenguaje común que favoreció la apertura de canales de diálogo.

Los censos también ayudaron inicialmente a hacer del desempleo un movimiento político puesto que cientos de residentes de los barrios populares acompañaron a los líderes a presentar el resultado de esas mediciones en oficinas públicas. Crearon un expediente siguiendo las instancias burocráticas de la institucionalidad esta-

<sup>6</sup> “Una forma de reclamo que se extiende. Siguen los cortes y De la Rúa descarta un estallido social”. Diario *Clarín*, 2 de noviembre de 2000, página 8.

<sup>7</sup> Las categorías sociales o nativas que van apareciendo de manera recurrente las señalaré con letra cursiva.

<sup>8</sup> La conformación de Comunidades Eclesiales de Base se retoma según las orientaciones emanadas del Segundo Concilio Vaticano (1962-1965), las cuales pueden sintetizarse en tres puntos: incentivar la participación de los laicos, promover la justicia (y denunciar la injusticia) y lograr una evangelización más eficaz entre las clases populares (Levine y Mainwaring, 2001).

<sup>9</sup> Los trabajadores se enfrentaron a reformas liberales del Estado que se trasmataron en privatización, descentralización y amenaza, enfrentando despidos bajo la forma de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, congelamiento salarial y extensión de contrataciones temporarias (Duhalde, 2009; Manzano, 2013).

tal pero, al mismo tiempo, montaron campamentos en la plaza principal de La Matanza u ocuparon edificios públicos, como la sede de la entonces Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, a la espera de la apertura de diálogo con las autoridades gubernamentales. Valiéndose del resultado de esos censos demandaban alimentos y trabajo. Estos primeros encuentros tuvieron un destacado rol en estabilizar un marco de negociación entre el Estado y aquellas organizaciones que comenzaban a representar a los desocupados en los barrios populares.

Como anticipé, frente a este tipo de movilizaciones el Estado argentino, en sus escalas nacionales y provinciales, comenzó a responder con la extensión de políticas de *workfare*<sup>10</sup> o transferencia condicionada de ingresos, financiadas con préstamos de organismos internacionales de crédito a cambio de ajustes estructurales. Estas políticas ofrecían 50 dólares mensuales a familias desocupadas con niños en edad escolar, los cuales se debían someter a controles sanitarios y cursar la escolaridad formal. A cambio, los beneficiarios debían incorporarse en proyectos productivos o comunitarios, tales como comedores comunitarios, construcción de infraestructura urbana o huertas, para nombrar solo unos pocos. Se implementaron por primera vez en 1996 y, habiendo pasado por distintas denominaciones, se unificaron en el año 2002 bajo el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, alcanzando a 2 millones de beneficiarios.

Estos programas eran parte de una propuesta más amplia del Banco Mundial para los Estados latinoamericanos que, entre otras cuestiones, recomendaba reformas sectoriales de los servicios sociales y redefiniciones del rol del Estado en el tratamiento de la pobreza. En este sentido, en 1988 se conocieron los resultados de una misión de monitoreo sobre lo que el propio Banco Mundial definió como sector social; en ese informe se concebían como problemas fundamentales de los servicios sociales argentinos la centralización, la falta de coordinación entre los sectores públicos y privados, y la universalización que cubría la asistencia a personas no pobres descuidando la atención de los grupos pobres. Sobre la base de ese diagnóstico se proponía una serie de reformas fundamentales fundadas en el lenguaje de la eficiencia y la equidad, como la planificación descentralizada, la reestructuración fiscal y administrativa, y la focalización del gasto social para reducir la pobreza de manera eficaz y a menor costo. Con el objetivo de sostener en el tiempo esas reformas se sugería establecer canales para la participación de los beneficiarios directos a partir de la incorporación de organizaciones de base y comunitarias (The World Bank, 1988).

Bajo esta concepción neoliberal de Estado mínimo, cuando el movimiento de desocupados extendió el alcance de los programas de transferencia condicionada de ingresos entre poblaciones desempleadas y pobres también asumió la gestión colectiva y descentralizada de esos recursos.

La gestión colectiva de las políticas implicaba responsabilidades administrativas y técnicas que se de-

legaron en un conjunto de personas que contaban con apenas estudios primarios completos, pero eran elegidos por escribir con buena caligrafía y pocos errores de ortografía, además de agenciar algunos pocos saberes sobre la operación de paquetes informáticos (Manzano, 2008, 2013). Esas personas con el tiempo fueron reconocidas dentro de las organizaciones de desocupados como técnicos, indicando con ello la profunda especialización de tareas. Una gesta que solían relatar era cuando en veinte días completaron una operatoria denominada *vinculación y carga*, durmiendo muy poco, en las propias sedes de los movimientos, y alimentándose con platos que preparaban para ellos el resto de sus compañeros. Esto sucedió en 2002, cuando las organizaciones de desocupados tuvieron que presentar ante dependencias gubernamentales el listado informatizado de beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar y la documentación probatoria —las dos primeras hojas del documento nacional de identidad, constancia del Código Único de Identificación Laboral y certificados relacionados con la *carga*, es decir con los hijos menores de 18 años o discapacitados de cualquier edad, tales como partida de nacimiento, constancias de escolaridad y vacunación, y diagnósticos médicos/psicológicos—. Además, debían realizar la vinculación de cada beneficiario con un proyecto: consignar en planillas especiales el título del proyecto, la fecha de inicio y finalización, cantidad y nombre de beneficiarios, lugar donde llevarían a cabo las actividades, resultados esperados, y detalle de insumos, herramientas y materiales.

La tarea de los técnicos era continua y se reaviva mes tras mes cuando las dependencias gubernamentales remitían el listado de beneficiarios y los lugares habilitados para el cobro de los beneficios. A partir de allí, debían detectar los motivos por los cuales algunas personas no figuraban en el listado, diferenciar errores de otras dependencias estatales de los suyos propios, que mayormente estaban vinculados a problemas de carga de datos, como faltas de ortografía u omisiones en el tipeo, e iniciar intrincadas tramitaciones para restituir esos beneficios. En ese sentido, Rosa, coordinadora técnica de la CCC, me comentaba en una charla grupal:

No nos podemos equivocar. A veces estamos pasando a la computadora, por ahí la una de la mañana y ya no damos más, y estas —refiriéndose a sus otras compañeras en tono jocoso— me dictan y me dictan cualquier cosa. Ella tiene un problema entre la c y la s, yo siempre le digo la de casa o la de sol. Y Mirta, que es otra compañera, siempre tiene problema con el número de CUIL, porque lo quiere hacer rápido y yo me doy cuenta que falta un número porque me salta en el campo de la computadora. (Registro de campo, 7 de mayo de 2005)

El manejo de políticas requirió tanto de la especialización de tareas como de la adecuación de la infraestructura; por eso mismo se estableció una cuota voluntaria para gastos comunitarios de funcionamiento, generalmente un porcentaje mínimo del estipendio recibido por los beneficiarios. La recaudación de dinero se completaba con colectas, rifas, ferias de ropa o del plato,

<sup>10</sup> En otro trabajo analizo detalladamente la estrategia de *workfare* (Manzano, 2013).

bingos o bailes. Ese fondo se destinaba principalmente a la mejora de equipamientos para llevar adelante las tareas de vinculación con organismos del Estado, como la compra de computadoras, fotocopiadoras, papel, cartucho e impresoras. Porcentajes menores se empleaban también para costear pasajes o la renta de autos para transportar documentación hacia dependencias gubernamentales; comprar insumos para proyectos, como gas envasado para la cocción de alimentos en copas de leche o comedores comunitarios; afrontar gastos de movilizaciones que se extendían por largas horas y se realizaban en puntos distantes, como el alquiler de micros y la adquisición de bebidas y alimentos para la jornada. Los espacios eran progresivamente rediseñados para almacenar planillas y alimentos provenientes de políticas estatales. Además, un grupo de personas ejercía guardias nocturnas y rotativas para custodiar las instalaciones con el objeto de proteger los bienes comunes y la documentación acopiada.

Retomando las propuestas de Roseberry (1994) y Hale (2014), me interesa abordar este campo de relaciones desde el concepto gramsciano de “hegemonía”, entendiendo la hegemonía no en términos de consenso ideológico sino como una unidad compleja de coerción y consenso, en tanto proceso de dominación y lucha, problemático y disputado (Roseberry, 1994). En nuestro caso, desde la década del ‘80 se fue configurando un marco común, material y significativo, que estableció los términos centrales sobre los cuales, y el terreno sobre el cual, podía ocurrir la lucha, la impugnación y la demanda, primero en torno a leyes de expropiación para asegurar un lugar en la ciudad, luego sobre puestos de trabajo en programas de financiamiento internacional. Términos y terrenos que no fueron elegidos de manera autónoma por las poblaciones subalternas, pero a través de los cuales generaron una intensa actividad.

Con relación a ello, recuperando precisiones de Hale (2014) sobre el movimiento indígena, aquí advertimos cómo la apertura de un campo relacional producto de las movilizaciones de desocupados estructuró contradictoriamente los espacios a ocupar y los lenguajes de controversia apropiados. En esos espacios las rutinas e iniciativas estaban constreñidas por la disciplina que imponía el manejo colectivo y descentralizado de políticas de orientación neoliberal, las cuales modelaron parte importante de las dinámicas históricas y cotidianas de los movimientos de desocupados. En el escenario abierto con reformas neoliberales actuaban conjuntamente dos tipos de lenguajes, uno de carácter legal aprendido progresivamente en confrontación con el Estado que define demandas en términos de derechos (derecho a títulos de propiedad, infraestructura, salud, educación, trabajo, etc.) sobre la base de la contribución que los residentes de las periferias hicieron a la ciudad, en un sentido similar a lo que Holston (2008) definió como ciudadanía insurgente. El otro orientado a redirigir la administración de bienestar, según la óptica de la gubernamentalidad que propone Chatterjee (2011), es decir la conexión con el gobierno a través de políticas diferenciadas, en este caso para desempleados, que ponen en juego criterios de legibilidad; por eso mismo los censos y las encuestas

se transformaron en posibilidades para fundar demandas y redirigir hacia esas poblaciones cierta provisión de bienestar.

En suma, me interesa destacar que el movimiento de desocupados se transformó en un actor central en los barrios populares en relación paradójica y contradictoria con el Estado neoliberal, transformando a los desocupados en sujetos de políticas públicas. Sin embargo, siguiendo la pista de los lenguajes de la lucha, me interesa mostrar cómo estas contradicciones eran vividas y cómo los vínculos de afecto y cuidado inscribían la gestión colectiva de la política en la gestión colectiva de la vida.

### 3. Arriesgar y afirmar: La experiencia de la lucha

Cada vez que se resolvió en una asamblea concluir con un piquete, luego de alcanzar algún tipo de acuerdo con autoridades estatales, se coreaba el siguiente cántico en señal de triunfo: “Olé, olé, olé, ola, como en Matanza y en Tartagal, la esperanza es la lucha popular”. En una ocasión, Alfredo, uno de los líderes de la CCC, me comentó que el movimiento no ofrecía un puesto de trabajo, como muchos suponían, sino un *puesto de lucha*. “La comida es de los que la lucharon”, sentenció José, un referente de la FTV, en otra oportunidad. El campo de relación que se abrió con el movimiento de desocupados convirtió a la lucha colectiva en un lenguaje y en un mecanismo central para alcanzar la provisión de cierto bienestar, redirigiendo las formas neoliberales de administración de las poblaciones pobres. De algún modo, como advirtió la antropóloga Julieta Quirós (2006), la lucha implicaba el esfuerzo incorporado a los bienes –alimentos o puestos de trabajo– para crearlos y transformarlos, y tornaba el hacer en un principio de derecho sobre aquello conquistado.

Ahora bien, cuáles son los sentidos que envuelve la lucha y qué nos dice esto acerca de otras relaciones, más íntimas y cotidianas, desde las cuales el movimiento de desocupados también tomaba su fuerza. Al respecto, en el año 2005, algunas organizaciones de desocupados, entre ellas la CCC, protagonizaron una nueva protesta en Plaza de Mayo; en un momento del día, me senté sobre el suelo junto con otras personas formando un círculo, mientras fluía la conversación, Don Chávez comenzó a repasar con nosotros su trayectoria en el piquete:

Cuando comencé en el piquete no tenía nada, me quedé sin laburo, yo creía que el mundo se me acababa a mí, yo creía que no había nada, que iba a perder mi matrimonio, todo, me sentía muy mal. Por un amigo entré al movimiento y empecé a andar en los piquetes, pasaron años caminando al ñudo, arriesgando, ya pasaron casi cuatro años de que empecé en la Corriente entonces ahí agarré cupo. Entonces comprendí que yo tenía que estar acá porque no había para mí oportunidad, porque yo ya era grande, ya era un viejo para la sociedad. Vos sabés que yo llegaba a mi casa, y vos sabés lo que es no tener para comer, vos sabés que mañana no tenés nada que darle a los pibes, vos sabés que tristeza, de saber que era

impotente y que era un parásito más que la sociedad me había obligado a quedar en el olvido, muy marginado de todo el sistema, como si te cortaran todos los cables y vos estas aislado del mundo.

Entre lágrimas, Don Chávez también recordó con quienes habían *caminado* a lo largo de tantos años y, particularmente, rememoró el corte de ruta de dieciocho días en mayo de 2001: “Pasamos en la ruta los dieciocho días de viento, lluvia, agua, no teníamos nada, teníamos dos o tres pedacitos de nylon, no sabés lo que era, era jodido”.

Cuando volví a repasar ese registro de campo reparé en el término que tanto Don Chávez como otras personas utilizaban para dar cuenta de su experiencia con el movimiento de desocupados: *arriesgando*. De acuerdo con el diccionario de uso del español de María Moliner<sup>11</sup>, arriesgar deriva de riesgos, o posiblemente a la inversa, por lo cual presenta acepciones tales como aventurar, comprometer, exponer o poner cierta cosa en peligro de perderse o destruirse. En el contexto en que esa categoría era enunciada por quienes tomaban parte del movimiento de desocupados de La Matanza, evocaba al menos dos sentidos de la experiencia colectiva: por un lado, aventurarse con los piqueteros era someterse al cumplimiento de normas que regulaban la participación y la disposición corporal para producir al propio movimiento a través de actos extraordinarios –marchas, piquetes, movilizaciones– y ordinarios –reuniones periódicas, asambleas y la contraprestación diaria fijada por los programas de transferencia condicionada de ingresos–; por otro lado, el término *arriesgando* también evocaba comprometer, exponer o poner en peligro el propio cuerpo y la propia vida así como el cuerpo y la vida de los demás.

Formar parte de una organización de desocupados representaba una posibilidad, entre otras, de obtener beneficios del Estado y dar sentido a la vida (Quirós, 2006; Sigaud, 2006). La antropóloga Lygia Sigaud (2006) denominó esta opción como apostar antes que aventurar; es decir, estar en el piquete constituía una apuesta para mejorar la vida donde trabajar por salario había dejado de ser una opción. Al cierre de la década del noventa, esta experiencia representaba aventurarse en un mundo social distinto a los ya conocidos para obtener un puesto de trabajo u otros recursos; con ello me refiero a que era común que inicialmente la personas respondieran a la pérdida de sus empleos reconvirtiendo parte de sus trayectorias de vida, por ejemplo adaptando oficios aprendidos en las fábricas a trabajos eventuales, estableciendo nuevos arreglos familiares y vecinales de colaboración, o acudiendo a referentes barriales del Partido Justicialista –peronismo– insertos en los territorios urbanos (Auyero, 2001; Ferraudi Curto, 2006; Quirós, 2011).

La segunda acepción del término *arriesgando* referida a comprometer, exponer, o poner en peligro el propio cuerpo y la vida daba cuenta de la experiencia profunda que se vivía colectivamente. En nuestra conversación, Don Chávez reflexionaba:

Vos venís y no sabés si volvéis. Yo llegaba mi casa y me debatía, me debatía, me debatía. Y hacíamos corte, movimientos, todo. Conocí compañeros que se desmayaban; el temor de no volver a casa, y en el caso mío, el terror de yo hacerle daño a uno, o que el otro me haga daño a mí...no sabés la tristeza que tenía.

El temor y el miedo se fundaban en experiencias vividas en común a lo largo de los años, como la descompensación de numerosos manifestantes en las marchas a pie desde La Matanza hacia Plaza de Mayo; la muerte de una mujer, Luisa Alegre, a causa de un ataque cardíaco durante el piquete que duró dieciocho días; o el riesgo de asumir la tarea de autodefensa o seguridad en piquetes y manifestaciones públicas. Con relación a esto último, Marcela, una joven que primero había integrado la CCC y más tarde la FTV, decía ser elegida para actividades de seguridad por su contextura física, y recordaba la experiencia extrema que había sentido en los cortes de ruta:

En los cortes era terrible, porque yo he visto cuando apuñalaron a un pibe porque no lo dejaban pasar adentro. Y se agarraron enfrente mío, tenía que tener cuidado de la gente que venía borracha, la gente que venía drogada, la gente que venía a robar. Era como mucha responsabilidad (Entrevista, febrero de 2006)

Quienes participaban de piquetes y manifestaciones debían aceptar ciertas normas como eran la prohibición de la ingesta de alcohol, el consumo de drogas y el robo. Quienes ejercían tareas de autodefensa o seguridad debían hacer cumplir esas normas; por eso mismo, entre ellos y ellas se intensificaban los riesgos de enfrentamiento. Más imprecisa era la figura del infiltrado puesto que la misma desplegaba una sospecha generalizada sobre conductas y personas. Esta figura aparecía asociada a anécdotas como la narración del sabotaje que decía haber sufrido la carpa del barrio Santa Emilia, donde residían los principales dirigentes de la CCC, en el corte de ruta de mayo de 2001, cuando se introdujo soda cáustica en una donación de alimentos y varias mujeres sufrieron quemaduras en sus bocas al confundir esa sustancia con sal mientras cocinaban en la olla popular. A veces, como se denunció en la prensa, se trataba de personas desconocidas que ingresaban en el piquete y que luego abordaban autos sin número de identificación. En otras no eran desconocidos, justamente todo lo opuesto, personas que se habían ganado plena confianza de los principales líderes de las organizaciones de desocupados. La sospecha del infiltrado parecía confirmarse cuando las autoridades nacionales durante el corte de ruta de 2001 rechazaron inicialmente la interlocución de las organizaciones de desocupados aduciendo un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado en el cual se notificaba que los piquetes eran parte de la radicalización y competencia entre organizaciones. Así, equiparaban el corte de ruta con un ejercicio extorsivo e instauraban la distinción entre grupos politizados y desocupados auténticos –pobres, vulnerables y espontáneos–.

<sup>11</sup> Moliner, María (1997). *Diccionario de uso del español*. Madrid: Gredos, p. 255.

A la par de estos enfrentamientos y peligros, andar *arriesgando* también hacía parte de los encuentros con las fuerzas de seguridad del Estado. Más allá de las negociaciones que se establecían con las áreas sociales, también el gobierno actuaba declarando la ilegalidad de los cortes de ruta bajo el argumento de que los piquetes alteraban el orden público, afectaban el derecho de las personas, y atentaban contra el orden institucional y la vida democrática al incurrir en delitos castigados por el Código Penal vigente. En aquella época, el Código Penal estipulaba la prisión de tres meses a dos años para quienes estorbaran o entorpecieran el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire. Además de ese encuadre, también se amenazaba con imputaciones de sedición, intimidación pública o asociación ilícita que preveían penas más severas como el encarcelamiento por largos años.

El desbalance de fuerzas en torno al piquete también generaba temor y tensión, especialmente porque participar de esa acción consistía en habitar transitoriamente la ilegalidad según los parámetros impuestos por el Estado a través del Código Penal. Así, en piquetes como los de 2001, cuando las áreas de gobierno vinculadas con programas sociales demoraban el inicio del diálogo se acrecentaba el temor de una orden judicial que dispusiera el despeje de la ruta por la fuerza de policía. Esto, a su vez, remitía al conocimiento de otros cortes de ruta del país, los cuales habían sido reprimidos por las fuerzas de seguridad dejando un elevado número de manifestantes heridos, detenidos y asesinados. Otros encuentros eran aquellos en los que se enfrentaban controles y retenes policiales camino hacia manifestaciones, como había sucedido en varias ocasiones, lo que hacía volver el recuerdo de niños y mujeres llorando mientras otra parte se concentraba en la puerta de comisarias para aprontar la liberación de detenidos.

El 20 de diciembre de 2001, Don Chávez estaba concentrado con otros integrantes de la CCC sobre la ruta 3, en cercanías de un supermercado, cuando la policía avanzó sobre ellos disparando balas de goma y de plomo, hiriendo a varias personas. Recuerda estremecido cómo corrían adentrándose en las calles de los barrios que bordean la ruta, logrando ponerse a salvo en la vivienda de parientes u otros integrantes del movimiento. Entre los heridos, tres jóvenes fueron los más afectados, uno de ellos tuvo que reconstruir parte de su cuerpo por el daño causado por una bala de plomo. Cuando visité por primera vez el barrio Santa Emilia, en abril de 2002, para participar en el centro de salud de un encuentro denominado “Medicina social y salud para la lucha” desfilaron por el palco los tres jóvenes heridos en diciembre, alzando sus manos en señal de victoria, mientras los médicos los nombraban uno a uno, nos informaban sobre el tipo de herida sufrida y destacaban el heroísmo de los muchachos.

Otras situaciones en las que Don Chávez sintió que arriesgó su vida fueron más ambiguas puesto que, en sus propias palabras, se trató de *enfrentamientos de pobres contra pobres*. Especialmente, cuando una madrugada de enero de 2002 bloquearon el ingreso

de camiones al Mercado Central para solicitar bolsas de alimentos y fueron golpeados por los propios trabajadores de los puestos<sup>12</sup>. Ese mercado se encuentra en La Matanza y era parte de los recorridos cotidianos de numerosas personas que pertenecían al movimiento de desocupados, quienes completaban sus ingresos familiares buscando verdura y fruta sobrante para completar las dietas de sus unidades domésticas o recibían alimentos como donaciones para comedores comunitarios. En esa oportunidad se peticionaron alimentos bajo una protesta organizada, intervino el Intendente para entablar un diálogo entre los puesteros y los desocupados, mediante el cual acordaron entregar bolsones de verduras y frutas de entre 20 y 50 kilos cada uno. Pero en el momento de las corridas y los golpes, un compañero de Don Chávez, huyendo a toda prisa, se resbaló por una pendiente y cayó en medio de una autopista siendo embestido por un auto que le causó la muerte al instante.

*Arriesgar* también se refiere a exponer o poner el cuerpo en una situación de desgaste durante el tiempo que dure el piquete o en movilizaciones, soportar el frío, las lluvias persistentes, o el intenso calor en el verano. Marcela refiriéndose al corte de los dieciocho días decía: “Yo tengo alergia, pero por el corte de los dieciocho días tuve dos veces neumonía, por el frío y la lluvia que pasamos”. En verano, las carpas sanitarias o ambulancias atendían lo que definían como casos típicos de un piquete tales eran hipertensión, insolación y deshidratación.

Por todos estos motivos, estaba habilitada la figura del relevo o los reemplazos. Con la primera categoría, se hacía referencia a un sistema de turnos; por lo general, mujeres, niños y ancianos permanecían en la carpa de los piquetes durante el día y eran relevados por varones durante la noche. La segunda indicaba cómo se organizaba la participación en el marco de relaciones familiares, de vecindad y amistad, ya que una persona registrada en el listado podía ausentarse de cortes de ruta y movilizaciones pero en su lugar dejaba a otra –un familiar cercano o un amigo– para demostrar que continuaba interesada en un puesto de trabajo. Una mujer que participaba del círculo que habíamos armado en Plaza de Mayo con Don Chávez, acotaba:

–Mi familia está muy preocupada de que esté acá, pero prefiero venir yo que ya tengo 50 años, si tiene que pasar algo que me pase a mí, pero no a mis hijos que tienen que seguir adelante.

–¿Tenés muchos hijos?

–Sí, tengo seis y soy sola, viuda, y no tengo estudio, no tengo trabajo, por eso estoy acá, pero te digo que es muy difícil.

Sandra, la referente de la FTV del barrio San Alfonso con quien compartí todos mis años de trabajo de campo, se enfurecía cuando entendía que se arriesgaba a alguna persona por un puesto de trabajo. Solía contarme que

<sup>12</sup> “Incidentes entre desocupados y trabajadores del Mercado Central”. Diario *La Nación*, 14 de enero de 2002. <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/incidentes-entre-desocupados-y-trabajadores-del-mercado-central-nid366604>, consulta 4 de diciembre de 2019

una vez, cuando ingresaban haciendo cordón de seguridad en una movilización, notó que una joven estaba con un embarazo avanzado, y dice haberse acercado a ese grupo y recriminar a la responsable del siguiente modo: “¿por qué la arriesgan por un puesto de trabajo?”.

Las circunstancias que extremaban el riesgo se interpretaban, en parte, como resultado de la represión del gobierno, pero también como reprobación a lo que se consideraba errores de los dirigentes de las organizaciones de desocupados, tales como falta de habilidad para conducir el diálogo en una protesta, malos acuerdos y negociaciones y, fundamentalmente, desorganización. Este era un tema de preocupación y, precisamente, en la división de tareas entre los principales dirigentes del movimiento de desocupados, se ponía mucho esmero en organizar detalles de una movilización o piquete, coordinando horarios, trayectos, paradas, vehículos, alimentos y atención sanitaria, entre otras cuestiones.

Don Chávez también decía haberse *afirmado* en el movimiento, no sin dudas ni sin seguir arriesgando. Esto se relacionaba con la construcción de un contexto político, social y cultural dentro del cual las personas se sentían medianamente cuidadas para poder actuar en el mundo. Los piquetes no eran simplemente cuerpos sobre la ruta, tampoco las marchas eran cuerpos caminando, eran formas complejas de acción colectiva entrelazadas con relaciones de afecto y contención; por ello, la experiencia de la lucha era más ambigua y no se agotaba en el riesgo.

En el caso de los cortes de ruta, el inicio de un piquete o el momento de instalación en la ruta era un acto ritualizado: mujeres, varones, ancianos, jóvenes y niños marchaban a pie por diferentes calles y confluían en el kilómetro seleccionado previamente para erigir el piquete. Los manifestantes vestían chalecos y sombreros, enarbolando banderas con las siglas de las organizaciones a las que pertenecían. Una vez que todos se reunían en el punto seleccionado, entonaban el himno nacional argentino, se vivaban consignas y, sucesivamente, comenzaban a montar las carpas –estructuras de palos, nailon y lonas– bajo las cuales permanecían por el tiempo que se extendiese el piquete. En cuanto al espacio, el piquete cubría aproximadamente seiscientos metros a lo largo de la ruta. Los límites se señalaban con neumáticos encendidos, custodiados por grupos denominados seguridad, por la FTV, y autodefensa por la CCC (Manzano, 2013).

Dentro de esos límites, las carpas se ordenaban en hileras; cada una exhibía la bandera con las siglas de la organización en la cual se inscribía y el nombre del barrio al que pertenecía. Para sostener la medida en el tiempo se requería de especialización y coordinación de tareas. Algunos se encargaban del abastecimiento y la distribución de alimentos, agua mineral, y pañales para niños pequeños. Médicos, enfermeras y agentes sanitarios atendían emergencias puntuales, pero también asesoraban sobre los cursos a seguir ante otro tipo de dolencias. Miembros de sindicatos de maestros preparaban actividades con niños, tales como prácticas de escritura, dibujos y juegos. Algunos grupos rotaban diariamente para mantener la higiene, otros se abocaban a difundir

el conflicto en la prensa u otros ámbitos, entre ellos las universidades públicas (Manzano, 2013).

Ese contexto favorecía la sociabilidad y la emergencia de un lenguaje de solidaridad y alegría conjuntamente con la experiencia del riesgo. Se compartía la comida, las actividades y el espacio, y desde el palco oficial montado sobre un camión, se pasaban distintos tipos de anuncios: “Al barrio Emilliozi de la CCC le sobró leche; los que quieran pueden pasar a buscar la leche por la carpa del barrio (...). Se informa que el Sr. Galván del barrio Las Nieves de la FTV fue trasladado al hospital y quedó en observación”. A la par se organizaban concursos de baile, juegos grupales –fútbol, naipes, etc.– y recitales de bandas musicales cuya actuación era un modo de expresar solidaridad con los piqueteros. Estar en el piquete también era una forma de distracción puesto que se visitaban las carpas de otros barrios para encontrarse con parientes y con amigos a los que hacía mucho no se visitaba. A lo largo del día, también se conversaba en pequeños grupos, se tejía y se escuchaba la radio.

La lucha era una actividad social compleja que anudaba trayectorias configuradas en distintas escalas y tiempos en un lugar determinado en el que se practicaba un ser juntos (Manzano y Ramos, 2015), y se gestaban formas de solidaridad afectiva (Juris, 2012, 2014). Era también la posibilidad de acrecentar determinados bienes redirigiendo disputadamente la administración neoliberal de la pobreza. Por eso mismo, entrañaba una contradicción profunda entre la gestión colectiva de esas políticas y el cuidado de la vida que abordaré en el siguiente apartado.

#### 4. La gestión de las políticas, la gestión de la vida

En el marco de la gestión de políticas neoliberales, la lucha también se transformó en el criterio principal para administrar y redistribuir recursos, fundamentalmente alimentos y puestos de trabajo, entre los miembros del movimiento de desocupados. La lucha tendió a objetivarse en un sistema de puntaje que se componía del promedio mensual entre movilizaciones –corte de ruta, manifestaciones, etc.–, la concurrencia a asambleas, y la asistencia a proyectos durante cuatro horas diarias para contraprestar como beneficiarios. Este último requisito no se aplicaba a quienes esperaban por el beneficio de un *plan*, aunque las personas solían demostrar su interés colaborando algunos días a la semana, especialmente en comedores y copas de leche. El puntaje alcanzado se sumaba, acumulaba y registraba en un orden de mérito que se valorizaba cuando a través de la acción política colectiva se alcanzaba algún tipo de acuerdo para aumentar el número de beneficiarios.

Sin embargo, la lucha no era solamente un valor cuantificable puesto que refería a actividades sociales complejas en las que se arriesgaba el cuerpo y la vida para aventurarse por un puesto de trabajo. En esas actividades también se afirmaba el ser juntos por medio de prácticas de sociabilidad y contención; por lo tanto, la experiencia de la lucha también estaba asociada a dimensiones de solidaridad y alegría, o, incluso, al placer,

como sostuvo la antropóloga Julieta Quirós (2011). Para quienes lideraban estos movimientos, la lucha emplazaba a los piqueteros en el tiempo y en el espacio para constituirse a sí mismos como sujetos colectivos en una historia común de acción que, tal como destacó Lazar (2019) para el caso del activismo en Argentina, recupera figuras ejemplares como fuentes de inspiración y narrativas de compromiso. En este sentido, en las asambleas eran frecuentes intervenciones como la que aquí transcribo: “Tenemos que seguir el tren de la historia que iniciaron Bolívar, San Martín, Rosas, Yrigoyen y Perón” (Registro de campo, mayo de 2002); “Seamos coherentes con aquellos que lucharon, somos los herederos de Tupac Amaru, Yrigoyen, Perón y los desaparecidos” (Registro de campo, septiembre de 2002). Este tipo de elaboraciones también eran parte de programas más formalizados como los cursos de formación política destinados a referentes barriales. Además, se inscribía la lucha en un espacio regional a través de intercambios frecuentes con otros movimientos sociales de Latinoamérica y de África.

Por todo ello, la lucha como un valor cuantificable de cara a la redirección de políticas neoliberales invariablemente era desbordada y se tornaba en centro de intensas controversias. Evitar el riesgo de exponer el cuerpo y la vida representaba una posibilidad contemplada colectivamente para aquellos que eran definidos, al menos en la CCC, bajo la categoría de *prioridades: enfermos, ancianos, discapacitados, y mujeres embarazadas o solas con numerosos hijos pequeños a cargo*. En cierto sentido, las *prioridades* se asemejaban a las categorías de personas históricamente definidas como destinatarias de asistencia. Esto se puso en juego en informes y documentos de organismos internacionales de crédito durante la década del '90, los cuales definían el problema en términos de focalización, ponderando la relación entre el equilibrio macroeconómico y el gasto social. En Argentina, se crearon carreras de especialización en gerencia de políticas sociales, y se diseñaron recursos y paquetes informáticos para la recolección de información con el propósito explícito de mejorar la selectividad de los beneficiarios delimitando con mayor precisión a los grupos de pobreza para optimizar partidas presupuestarias (Manzano, 2013). En el caso del Programa Jefes y Jefas de Hogar, se definió como sus destinatarios a desocupados con hijos de hasta dieciocho años de edad o discapacitados de cualquier edad, con residencia permanente en el país.

Definir colectivamente a ciertas personas como *prioridades* no era una tarea sencilla puesto que era un tema sujeto a discusión, debate, reclamo y sospecha. En el patio de la Escuela Blanca, sede principal de la CCC en La Matanza, se formaban diariamente filas de personas que aguardaban para conversar con Adelina, unas de las principales líderes de la organización. En uno de esos días, el 9 de marzo de 2006, mientras esperaba, salió de un salón Ramón, uno de los primeros integrantes de la CCC del barrio Santa Emilia, me detalló sus problemas de salud a causa del tabaco, se agitaba para hablar y caminaba lento, aunque con cierta firmeza me dijo: “A veces no puedo más pero no voy a abandonar la lucha”. Nuria, su pareja, se sumó a nuestra conversación, apenas

minutos después llegó Mary, Nuria la miró para abrir el diálogo:

—¿Qué haces Mary?, tanto tiempo, ¿venís a buscar la mercadería?

—No, nadie me avisó que la tenía que venir a buscar, el otro día pregunté y nadie me dijo nada. Yo vengo a hablar con la Ade porque conseguí una changa, a veces me sale una semana entera y a veces no me sale, entonces tengo que ver que voy a hacer porque ella me puso ahí en el comedor.

—Ah, interviene Nuria.

—Encima estoy enferma, tengo que hacerme estudios y no sé si no me tienen que operar.

Entre ese agitado movimiento, se acercaron a saludarme “los pibes de la batucada”, como eran reconocidos por todos allí, que encabezaban las columnas del movimiento piquetero en distintas movilizaciones ejecutando instrumentos musicales, mayormente bombos y redoblantes. Habían crecido en el barrio Santa Emilia, apenas comenzada la ocupación de tierras, y, en los años de los piquetes, sus edades oscilaban entre los dieciocho y los veinticinco años, casi todos eran padres de hijos pequeños, y participaban de distintas instancias que se organizaban especialmente para ellos en el centro de salud con el objetivo de ayudarlos a limitar el consumo de sustancias psicoactivas. En el barrio solían reunirse en la misma esquina, frente al centro de salud, y en algunas ocasiones iban juntos al cementerio para pasar algo de tiempo con sus amigos ya fallecidos, sea porque no habían podido controlar el virus del VIH o por muertes en enfrentamientos violentos. Ese día estaban en la Escuela Blanca descargando camiones con escudos del gobierno que transportaban alimentos, por lo que Adelina solicitó raciones en el comedor comunitario para ellos en agradecimiento a la colaboración que estaban prestando.

Adelina era quien tenía asignada la tarea de escuchar los argumentos que exponían todas las personas que aspiraban a ser reconocidas como *prioridades*. En ese vínculo, era el cuerpo enfermo y sufrido el que otorgaba la posibilidad de reconocimiento, evitando con ello el riesgo que conllevaba cumplir con la lucha. En un trabajo pionero en este sentido, el antropólogo Didier Fassin (2003) recuperó aportes de Foucault y de Hannah Arendt para destacar la operatoria de una política centrada en argumentaciones de enfermedad y sufrimiento que ponía de relieve una forma de gobierno de los hombres a partir del cuerpo como fuente de derecho. El autor analizó cartas enviadas a una dependencia estatal instalada en las periferias de París, como parte de la puesta en práctica de un fondo de urgencia social cuyo objetivo era dar respuesta al movimiento de desempleados y precarios. Su análisis identificó la estructuración de una argumentación patética mediante la cual los sujetos se contaban a sí mismos, revelaban su desamparo y presentaban los signos más demostrativos de su deterioro físico para certificar extrema necesidad material y convencer de ese modo a la comisión gubernamental para la entrega de un subsidio. Ahora bien, en nuestro caso los actores que

gestionaban esos casos eran otros y sus decisiones estaban en el centro del escrutinio colectivo.

Adelina gozaba hasta cierto punto de la capacidad para otorgar el reconocimiento de *prioridades* y, de ese modo, eximir, de manera temporal, tanto de la participación en cortes de ruta y movilizaciones como de la contraprestación en los proyectos de trabajo. Tal como pude observar, las personas solían acompañar sus relatos con certificaciones médicas, diagnósticos, órdenes de tratamiento o con la promesa que los trabajos eventuales que interferían con la prestación serían acotados en el tiempo. Entre las presentaciones se establecía cierta jerarquía para el reconocimiento, como cáncer, tuberculosis, VIH, o problemas con el consumo de drogas y alcohol. Más allá de las certificaciones, el reconocimiento terminaba recayendo en la confianza personal que depositaba Adelina en quienes presentaban sus casos, en el conocimiento mutuo, pero otros consideraban que las *prioridades* eran en gran medida fabricadas por estrategias personales de *viveza* y *simulación*.

Con relación a esto, el reconocimiento de *prioridades*, paradójicamente, realzaba el valor de la lucha colectiva. En las asambleas de la CCC era común escuchar este tipo de intervenciones:

Hola compañeros yo soy X, la ex dirigente del barrio Giardino, por ahí algunos no me conocen, yo soy una de las primeras del movimiento, yo estoy desde que empezó el movimiento, pero por un problema de salud, estoy muy enferma, no puedo venir como antes, tuve que dar un paso al costado y dejar a otro dirigente. Yo siempre estoy con mi barrio, les digo que nos bajen los brazos, que luchan. Yo no voy a poder ir al corte de ruta, porque, como ya les digo, estoy muy enferma, me tengo que cuidar, el médico dice que tengo que hacer reposo, aunque sí puedo por ahí voy un rato al corte. Los compañeros más viejos saben que yo era una de las primeras que estaba en el corte, estuve los dieciocho días en el corte. Bueno, nada más compañeros, hay que seguir luchando. (Registro de campo, 2005)

Las personas también se preocupaban por manifestar su disposición para la lucha en conversaciones más informales, por ejemplo, en el mismo círculo que compartimos en Plaza de Mayo con Don Chávez, Gauna comentó acerca de su propia historia con los piquetes:

Yo tuve de bueno que con mi señora y mi hija luchamos siempre en la calle. Empezamos a luchar juntos, mi hija Gisela Laura luchó conmigo, en medio del agua de los dieciocho días, pero ahora tiene problemáticas, tuvo gemelitos, y se abrió un poquito, pero ella luchó a pie cruzado, mi señora y ella.

En otros casos, se realzaba el valor de la lucha, pero se ponía en entredicho el sentido de justicia con el que era valorizada para el reconocimiento social. En una ocasión que visité la casa de una organización de mujeres vinculada a la CCC en el barrio Santa Emilia, durante una reunión donde se decidiría cómo poner en

funcionamiento un proyecto de costura, se produjo el siguiente altercado:

Puedo decir algo, esta es mi última reunión, yo me voy porque conseguí una changa permanente con mi hija y mi sobrina. Ellas me ayudaron a tomar esta decisión. Me voy peleada con el movimiento, no con esta casa. Yo me sacrificué por este movimiento, y no me tuvieron en cuenta para nada. Anduvieron hablando mal de mí por tres pesos roñosos, porque usé una máquina de coser para terminar dos almohadones que yo vendo por mi cuenta. El padre de ella, señalando a su hija, se enfermó por tantos cortes y marchas, se enfermó por este movimiento, y los del movimiento recién lo visitaron a lo último. Yo tanto di acá, y hay gente que no viene, que no cumple, y parecería que es todo lo mismo. Yo tengo justificativos psicológicos y psiquiátricos para no venir, pero jamás los usé, porque me sacrificué por este movimiento. (Registro de campo, 1 de marzo de 2006)

Tal como advirtió la antropóloga Julieta Quirós (2011), si la necesidad fundaba derechos los mismos entraban en contradicción con el principio de la lucha, porque luchar implicaba ganarse las cosas con esfuerzo y sacrificio. En razón de ello, los principales referentes de las organizaciones de desocupados dedicaban tiempo para fundamentar y escribir acerca de la importancia de la lucha y de su objetivación en un sistema de puntaje. Por un lado, señalaban la responsabilidad que implicaba administrar bienes escasos, los cuales se acrecentaban entre las poblaciones desempleadas y pobres en función de la intensidad de la acción política colectiva. El escenario abierto con la lucha de los desocupados había habilitado un nuevo espacio para sus organizaciones como era el manejo descentralizado de políticas neoliberales, incluyendo la selección de beneficiarios. Ante ello, el puntaje se consideraba una medida de justicia frente a la responsabilidad que conllevaba operar con una extensa lista de espera cuyas características comunes eran aquellas previstas por las normativas de los programas, es decir, desocupados con hijos menores o discapacitados a cargo: “¿Cómo saber quién tiene más necesidad que quién?”, solían preguntar públicamente los referentes. Por otro lado, el sistema de puntaje no era visto como una forma de castigo, sino como un criterio justo y solidario basado en el premio al esfuerzo y el reconocimiento de quien participa, trayendo para ello ejemplos históricos como algunas medidas adoptadas por Ernesto “Che” Guevara en el Ministerio de Industria en Cuba.

Quirós mostró cómo la participación en la lucha era una forma de hacer de la asignación un acto merecido y justo a los ojos del colectivo, y de esa manera prevenir privilegios y arbitrariedades en la responsabilidad que conllevaba la distribución de recursos (Quirós, 2011). También señaló que no era un sistema que operaba de arriba hacia abajo, de los dirigentes a las bases, ya que el control de la asistencia y el cumplimiento de tareas era un tema de interés común y materia de furioso reclamo por parte de cada uno de los interesados, puesto que era visto como reconocimiento social del mérito a aquellos

que se esforzaban, trabajaban y sacrificaban como parte de un colectivo para alcanzar metas de interés mutuo.

Esta contradicción asumía otros contornos como eje de contención y de cuidado. Con la noción de contención, Lazar se refiere a prácticas terapéuticas que se ponen de relieve en la habilidad para contener un problema y procesar la comunicación emocional. Son al mismo tiempo formas de integración del individuo al grupo al ofrecerles un espacio de protección y autorrealización (Lazar, 2019).

Las charlas con Adelina no eran simplemente un dispositivo de gobierno para reconocer al cuerpo enfermo como fuente de derecho en función de la gestión de políticas neoliberales, puesto que en esas instancias las personas se contaban a sí mismas y obtenían consejos y guías para alcanzar cierto grado de bienestar. Esto era evidente en el vínculo que Adelina había desarrollado con los “pibes de la batucada”. Ellos solían decir: “La Ade nos está haciendo *zafar*”, porque había establecido un marco que encuadraba el comportamiento de ellos tanto en manifestaciones públicas como en la vida cotidiana para que pudieran ser parte del colectivo. Más allá de estas instancias, en las asambleas, la casa de la mujer, o en distintos ámbitos de encuentro, las personas planteaban su reprobación de diversos aspectos que hacían al manejo de las políticas, pero también acompañaban o eran acompañadas con motivo de sus cumpleaños, del nacimiento de sus hijos, cuando estaban hospitalizadas, o en velorios familiares.

De manera complementaria, otras actividades estaban más formalizadas y requerían de gran esfuerzo para sostenerse en el tiempo. En el centro de salud, día tras día, actuaban médicos, enfermeras, agentes sanitarias, y psicólogos sociales vinculados con la CCC, quienes medían la talla y el peso de niños, curaban heridas, preparaban inyectables, controlaban la presión arterial, diagnosticaban, medicaban, visitaban casas para conocer sobre el estado de personas enfermas, y acompañaban hacia hospitales de mayor complejidad cuando las dolencias eran más severas. Coordinaban grupos y diseñaban proyectos para limitar el consumo de sustancias psicoactivas y prevenir la violencia de género. Un grupo de psicología social había creado un refugio para mujeres golpeadas, y se impartían talleres para entrenar a *letrados populares* en el manejo del sistema judicial. Asimismo, se organizaban veladas culturales y recreativas, y se colaboraba con el apoyo escolar de niños y jóvenes.

Al nivel cotidiano, las personas se reunían en grupos más pequeños para contraprestar como beneficiarias de programas de transferencia condicionada de ingresos. Los lugares para ello eran variados, usualmente las viviendas de los referentes de las organizaciones de desocupados o las sedes de los movimientos. Esos encuentros eran dados para la contención emocional y los trabajos que las personas realizaban sobre sí mismas. Las actividades de las que tomaban parte implicaban compromisos afectivos con categorías específicas de la población, como los vecinos en tareas de infraestructura, o los niños y ancianos en copas de leche y comedores comunitarios. Esos compromisos se amplificaban y escenificaban en algunos momentos del año, como los

festejos del Día del Niño y la Navidad, para los cuales preparaban más cantidad de comida y bebidas, confeccionaban juguetes y ropa para obsequiar, y mantenían la limpieza de las calles para montar los escenarios.

En mi trabajo de campo reconstruí decenas de trayectorias de vida; desde esas historias los momentos de encuentro diario en los proyectos eran vividos por las mujeres como *deshago* y *distracción*, según sus propios términos. Mientras realizaban sus tareas, conversaban sobre distintos temas, frecuentemente trataban asuntos como problemas de salud, acceso a servicios médicos, la crianza de los niños, los conflictos con hijos jóvenes referidos al uso de drogas, alcohol y robos, los vínculos de pareja, las tensiones entre parientes y la violencia hacia sus cuerpos. Algunas exponían sus problemas, otras escuchaban y se animaban a relatar sus experiencias para dar a conocer cómo habían enfrentado problemas similares. En tal sentido, en distintas entrevistas que mantuve solían afirmar:

Acá es parte de mi deshago. Yo vengo y les cuento a ellas de mis problemas. También las ayudo. (Marcela, FTV, barrio San Alfonso, marzo de 2006)

Con las compañeras conversamos. Yo no cambiaría este trabajo, cuando llueve miro por la ventana y trato de venir igual; si no, me aburro, me agarra la depresión. Si me llevo a sacar un número en la quiniela pondría un comedor para los chicos, porque a mí me gustan los chicos. (Juana, FTV, barrio Tierra Nuestra, agosto de 2002)

Venir para acá me gusta mucho porque será que me distraigo mucho acá. La vez pasada estaba mal y hablé con las compañeras y me puse bien. Los días de lluvia sufro porque no puedo venir, hay mucho barro y tengo que hacer veinte cuadras caminando para venir acá. (Carmen, FTV, barrio Tierra Nuestra, abril 2002)

En el encuentro cotidiano también respondían conjuntamente al carácter aleatorio de los *planes*, como cuando se cancelaba de manera imprevista el beneficio. Por lo general, donaban comestibles y tiempo para preparar comida, venderla en las ferias populares y con ese dinero ayudar a las personas que no recibían dinero por su contraprestación.

El conjunto de estas prácticas que definí, siguiendo a Lazar (2019), como contención constituyen formas de producción de sujetos mediante la incorporación de las personas al grupo. Lazar sostiene que para Foucault las operaciones de subjetivación en la historia occidental habrían estado a cargo del maestro, el consejero y de sujetos que se cuentan a sí mismos ante otros, con el objeto de transformarse en orden de obtener cierto estado de felicidad, pureza, perfección o inmortalidad. En este caso, la producción de sujeto estaba a cargo de técnicas colectivas inmersas en un campo de relaciones terapéuticas y de cuidado para constituir un colectivo en movimiento.

Las políticas neoliberales, tales eran los programas de transferencia condicionada de ingreso, también apuntaban a la constitución de categorías diferenciales de persona como parte del arte de gobierno que tiene

como blanco al movimiento de la población –nacimientos, muertes, enfermedades– al que Foucault (2006) denominó gubernamentalidad. Sin embargo, como apunta Fassin (2018), captar a los seres vivos a través del lente de la población es hacerlo de acuerdo a como el propio Estado lo hace, por ello sugiere el concepto de biolegitimidad para dar cuenta, tanto de la vida como objeto de sacralización en la sociedad moderna como de la vida en plural en cuanto se le asignan valores diferenciales en términos cuantitativos –duración– y cualitativos –las condiciones de existencia–. De este modo, podemos pensar que a través de las relaciones de contención y afecto se afirma a las personas como parte de un colectivo y contra formas de administración de la vida que reparten de un modo desigual su valor en términos de duración y de condiciones de existencia (Fassin, 2018).

## 5. Palabras finales

El movimiento de desocupados, tal como analicé en este artículo, expandió las presencias estatales entre poblaciones pobres y desempleadas mediante el aumento en la provisión de bienes. Desde trayectorias históricas y heterogéneas como la lucha por la tierra y la autoconstrucción de ciudad, o los modelos sindicales que proponían organizar a los trabajadores en sus lugares de residencia, apelaron a lenguajes de derecho y de legibilidad para plantear sus controversias e inaugurar una instancia de conflicto que se expresó en los bloqueos de ruta conocidos como piquetes. De esa forma, la movilización de los desocupados abrió un campo de relaciones en el cual el Estado se figuraba como un lugar para presentar y registrar demandas, y como un antagonista que define como ilegal ciertas acciones apelando al Código Penal, suspende temporalmente al movimiento de desocupados como interlocutor válido de la contienda y legítima, con ello, el ejercicio de la violencia.

En ese mismo campo de relaciones se formó el movimiento de desocupados en conexión contradictoria con la administración neoliberal de la pobreza, y ello tuvo su expresión en la extensión de programas de transferencia condicionada de ingresos, conocidos comúnmente como *planes*. La gestión de este tipo de programas habilitó un lugar particular para ser ocupado rutinariamente por las organizaciones de desocupados. Un lugar modelado por la disciplina que implicó la especialización de tareas, la modificación de infraestructuras, y la construcción de criterios para la redistribución de recursos. Era un lugar previsto para organizaciones comunitarias y gobiernos locales en el marco de reformas neoliberales del Estado que apelaban a la gestión participativa y a la descentralización.

Hace tiempo propuse la categoría de gestión colectiva de las políticas (Manzano, 2008) para dar cuenta de las acciones que daban forma diariamente al movimiento de desocupados de cara a la administración de programas de transferencia condicionada de ingresos y, fundamentalmente, distinguir esas acciones de aquellas nociones de gestión emanadas de organismos internacionales de crédito que, como señalé, acentuaban crite-

rios de eficacia, eficiencia y productividad, entre otros. Sin embargo, siguiendo la pista de los lenguajes de la lucha, como he mostrado aquí, se advierten una serie de contradicciones que pivotean entre la gestión de las políticas y la gestión de la vida. La lucha era una actividad social compleja, en las que se arriesgaba el cuerpo y la vida para aventurarse por un puesto de trabajo, pero también era el momento en el cual se afirmaban las personas en un ser juntos cuando practicaban la sociabilidad y la solidaridad. Por eso mismo, cuando la lucha se cuantificaba en un sistema de puntaje para gestionar políticas neoliberales y reasignar de modo descentralizado recursos ese vínculo era necesariamente rebasado por relaciones anudadas en torno a lo que definí como contención, siguiendo la propuesta de Lazar (2019).

Tanto en los momentos de la protesta como en el ritmo de la vida cotidiana distintas prácticas apuntaban a regular conductas e incidir sobre las subjetividades para asegurar cierto nivel de bienestar, entre ellas las conversaciones, las asambleas, las prestaciones en salud, las actividades educativas, la implementación de talleres para proteger a las mujeres de la violencia de género y a los jóvenes del consumo de sustancias psicoactivas y de los enfrentamientos violentos, y los encuentros diarios en los proyectos inscritos en los programas de transferencia condicionada de ingresos coordinados por referentes barriales del movimiento de desocupados.

Ahora bien, la relación de los movimientos sociales con el poder gubernamental ha sido un punto de debate crítico en los estudios sobre movimientos sociales debido a elaboraciones teóricas y ético-políticas comprometidas con proyectos de autonomía. Yendo hacia atrás, en el ámbito político e intelectual de América Latina tuvieron incidencia las elaboraciones europeas sobre los nuevos movimientos sociales (Touraine 1984, 1987; Melucci, 1994), especialmente en los tempranos años ochentas ante gobiernos militares en la región (Restrepo, 1992; Calderón, 1995). La formación de nuevos movimientos sociales, distintos al movimiento obrero y campesino, se explicó con referencia a la crisis de los Estados capitalistas y sus programas de desarrollo, así como al fracaso de las alternativas revolucionarias de las décadas del '60 y '70 (Jelín, 1987; Calderón, 1995; Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998). En aquellos momentos, la cuestión de la autonomía se pensaba en términos de la distancia de estos nuevos movimientos –mujeres, jóvenes, ecologistas, derechos humanos, etc.– con respecto al Estado, los partidos políticos tradicionales y los sindicatos, valorando proyectos alternativos de democracia y ciudadanía. Se estudiaba en qué medida esos proyectos colaborarían para redefinir aspectos del sistema político formal como para modificar prácticas económicas, sociales y culturales de la sociedad en su conjunto, desafiando rígidas jerarquías sociales estructuradas en torno a las clases, la etnia y el género (Alvarez, Dagnino y Escobar, 1998).

Las reflexiones acerca de la autonomía de los movimientos sociales con respecto al Estado cobraron otros impulsos cuando se amplió el rango de estudios sobre el movimiento indígena, considerado como sujeto arquetípico por su capacidad de resistir al capital globalizado (Lazar, 2019). En la actualidad, la reflexión sobre la

autonomía tendió a girar alrededor de la búsqueda de formas comunales de vida, de relacionalidad fuerte para crear colectivos de humanos y no humanos, un ser en el territorio, a través de luchas que no se reducen a reclamos por la tierra y su propiedad, sino que con ellas emergen mundos en movimientos que plantean conflictos de carácter ontológico (Escobar, 2017).

El análisis sobre formas autónomas de organización también es parte de los trabajos más recientes en antropología, que ahondaron en prácticas y tecnologías de coordinación y comunicación para construir comunidad, solidaridad afectiva y sociabilidad a partir de las diferencias (Juris, 2012, 2014; Razsa y Kurnik, 2012; Osterweil, 2014). En este marco, las ocupaciones de espacios públicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron consideradas como sitios donde se pusieron en práctica valores de democracia directa y auto-organización que prefiguran mundos alternativos que encarnan las visiones de los movimientos (Juris, 2012; Osterweil, 2014). O, en tal caso, espacios donde se experimentaron formas de democracia radical como parte de una política del devenir, que no prefigura debido a la indeterminación de lo que se está creando (Razsa y Kurnik, 2012).

En la mayoría de estos análisis, el movimiento piquetero es recuperado como un ejemplo señero de la puesta en ejercicio de valores comunitarios y de formas autónomas de vida a partir de la construcción de nuevas territorialidades, regidas por actividades sociales de producción y reproducción que escapan tanto a la explotación capitalista como a la dependencia esta-

tal. A diferencia de estas consideraciones, el trabajo etnográfico prolongado que llevé a cabo me permitió mostrar que el movimiento de desocupados se transformó en un actor central en los barrios populares, en relación paradójica y contradictoria con el Estado neoliberal, transformando a los desocupados en sujetos de políticas públicas. En cierto punto, las rutinas del movimiento e incluso su crecimiento y capacidad para coordinar un gran número de personas estuvieron influidas por una forma de gubernamentalidad neoliberal de administración de la pobreza. No obstante, el campo relacional abierto con el movimiento de desocupados no se ceñía exclusivamente a la gestión colectiva de políticas neoliberales, puesto que los afectos, el cuidado y la contención también requerían de la gestión colectiva de la vida.

En otros términos, el fundamento de las prácticas, tanto en momentos extraordinarios como ordinarios, era la vida misma (Fassin, 2018). Sin pensar este proyecto como un proyecto de autonomía, fundar las prácticas en la vida posicionaba un enfrenamiento con formas de administración que reparten el valor de la misma de un modo desigual. De ese modo, las prácticas del movimiento de desocupados renovaban la manera de entender la política colocando a la propia vida como su contenido para diseñar cursos de acción que apuntaban a construir una vida éticamente calificada (Fassin, 2018) en escenarios históricos y particulares de fuerzas sociales, entrecruzando la gestión de políticas neoliberales con la gestión colectiva de la vida.

## 6. Bibliografía

- Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina; Escobar, Arturo (Eds.) (1998). *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American Movements*. Boulder, Westview Press.
- Aristizábal, Zulema; Izaguirre, Inés (1988). *Las tomas de tierras en el Sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Auyero, Javier (2001). *La política de los pobres*. Buenos Aires: Manantial.
- Auyero, Javier (2004). *Vidas Beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Calderón, Fernando (1995). *Movimientos sociales y política. La década de los ochenta en Latinoamérica*. México: Siglo XXI.
- Chatterjee, Partha (2011). "La política de los gobernados". *Revista Colombiana de Antropología*, 47 (2): 199-231.
- Cravino, María Cristina; Vommaro, Pablo (2018). "Asentamientos en el sur del a periferia de Buenos Aires: orígenes, entramados organizativos y políticas de hábitat". *Población & Sociedad*, 25 (2): 1-27.
- Duhalde, Santiago (2009). "La respuesta de los sindicatos estatales al neoliberalismo en Argentina (1989-1995)". *Trabajo y Sociedad*, 13: 1-13
- Escobar, Arturo (1992). "Culture, practice and politics. Anthropology and the Study of Social Movements". *Critique of anthropology*, 12 (4): 395-432.
- Escobar, Arturo (2017). *Autonomía y diseño. La realización de lo comunal*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Fassin, Didier (2003). "Gobernar por los cuerpos. Políticas de reconocimiento hacia los pobres y los inmigrantes en Francia". *Cuadernos de Antropología Social*, 17: 49-78.
- Fassin, Didier (2018). *Por una repolitización del mundo. Las vidas descartables como desafío del siglo XXI*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Ferraudí Curto, María Cecilia (2006). "Lucha y papeles en una organización de desocupados del sur del Gran Buenos Aires", en D. Míguez, P. Semán (Eds.), *Entre santos, cumbias y piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente*. Buenos Aires: Biblos, 145-164.
- Foucault, Michael (2006). *Seguridad, territorio y población*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Guber, Rosana (2011). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Hale, Charles (2014). "Entre lo decolonial y la formación racial: luchas afro-indígenas por el territorio y por (¿o en contra de?) un nuevo lenguaje contencioso". *Cuadernos de Antropología Social*, 40: 9-37.
- Holston, James (2008). *Insurgent Citizenship. Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jelín, Elizabeth (1987). *Movimientos sociales y democracia emergente/I*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

- Juris, Jeffrey (2012). "Reflections on #Occupy Everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation". *American Ethnologist*, 39 (2): 259-279.
- Juris, Jeffrey (2014). "Embodying Protest: Culture and Performance within Social Movements", en B. Baumgarten, P. Daphi, P. Ullrich (Eds.), *Conceptualizing Culture in Social Movement Research*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 227-250.
- Lazar, Sian (2019). *Cómo se construye un sindicalista. Vida cotidiana, militancia y afectos en el mundo sindical*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Levine, D. y Mainwaring, S. (2001). "Religión y protesta popular en América Latina: Experiencias contrastantes", en S. Eckstein (Ed.), *Poder y protesta popular. Movimientos Sociales Latinoamericanos*. México: Siglo XXI, 237-273.
- Llistar, David (2003). "El consenso de Washington una década después", en L. Ramos (Ed.), *El fracaso del consenso de Washington. La caída de su mejor alumno: Argentina*. Barcelona: Icaria, Más Madera.
- Manzano, Virginia (2008). "Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires". *Runa. Archivo para las ciencias del hombre*, 28: 77-92.
- Manzano, Virginia (2013). *La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires*. Rosario: Ediciones Prohistoria.
- Manzano, Virginia; Ramos, Ana (2015). "Procesos de movilización y de demandas colectivas: estudios y modos de abordar 'lo político' en la vida social". *Identidades*, 8: 1-25.
- Manzano, Virginia (2017). "Dilemmas of trade unionism and the movement of the unemployed under neoliberal and progressive regimes in Argentina", en S. Lazar (Ed.), *Where are the unions?. Workers and Social Movements in Latin America, The Middle East and Europe*, London: Zed Books, 209-230.
- Melucci, Alberto (1994). "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales". *Zona Abierta*, 69: 153-178.
- Merklen, Denis (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Editorial Gorla.
- Nash, June (2005). "Defying Deterritorialization: Autonomy Movements against Globalization", en J. Nash (Ed.), *Social Movements. An Anthropological Reader*. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing, 177-186.
- Nash, June (2014). "Reassessing the Culture Concept in the Analysis of Global Social Movements: An Anthropological Perspective", en B. Baumgarten, P. Daphi, P. Ullrich (Eds.), *Conceptualizing Culture in Social Movement Research*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 67-90.
- Osterweil, Michal (2014). "Social Movements", en D. Nonini (Ed.), *A Companion to Urban Anthropology*. Chichester: Wiley Blackwell, 470-485.
- Quirós, Julieta (2006). *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires, Antropofagia.
- Quirós, Julieta (2011). *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Raza, Maple; Kurnik, Andrej (2012). "The Occupy Movement in Žižek's hometown: Direct democracy and a politics of becoming". *American Ethnologist*, 39 (2): 238-258.
- Restrepo, Luis (1992). "Movimientos Sociales y Democracia en América Latina". *Boletín Americanista*, 41: 79-92.
- Rockwell, Elsie (2009). *La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos*. Buenos Aires: Paidós.
- Roseberry, William (1994). "Hegemony and the language of contention", en G. Joseph, D. Nugent (Eds.), *Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*. Durham and London: Duke University Press, 355-366.
- Rossi, Federico (2015). "The Second Wave of Incorporation in Latin America: A Conceptualization of the Quest for Inclusion Applied to Argentina". *Latin American Politics and Society*, 57(1): 1-28.
- Svampa, Maristella; Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la Ruta y el Barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Sigaud, Lygia (2006). "Prólogo", en J. Quirós, *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires, Antropofagia, 13-19.
- Sojo, Ana (1999). "La política social en la encrucijada: ¿opciones o disyuntivas?", en J. Carpio, I. Novavovsky (Comps.), *De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 267-288.
- The World Bank (1988). *Argentina. Social Sector in Crisis. A World Bank Country Study*. Washington D.C.
- Touraine, Alain (1984). *Los movimientos sociales*. México DF: El Nacional.
- Touraine, Alain (1987). *El Regreso del Actor*. Buenos Aires: EUDEBA.